

SEGUNDA
PARTE

LOS NUDOS
GORDIANOS
QUE IMPIDEN
EL REENCUENTRO
NACIONAL

EN la primera parte de este libro hemos tratado de entender los orígenes y las varias dimensiones de la crisis nacional. Planteamos la tesis de que, precisamente por su globalidad, la crisis obligaba a revisar los fundamentos mismos de la convivencia y las formas de relación entre los grupos e individuos en la sociedad chilena. Por ello, afirmamos que la crisis era una oportunidad para llegar al fondo de los problemas que aquejan al país.

Esa es la razón por la cual centramos la propuesta en la idea de un reencuentro nacional.

Discutimos acerca de la renovación de una cultura democrática; de la necesidad de la cooperación y de la solidaridad. Concluimos esa primera parte con una formulación del tipo de estrategia de desarrollo que se deducía a partir de esos principios y que —al menos a la luz de la experiencia y los resultados en otros países— permitiría tener una expectativa relativamente optimista respecto de la reanudación de un crecimiento económico adecuado para la economía chilena.

Pero hasta ahora el análisis es incompleto, porque el crecimiento de la economía chilena no depende exclusivamente del hecho de que se disponga de una más adecuada estrategia de desarrollo. Para que éste pueda efectivamente ocurrir hay que romper algunos nudos gordianos que entraban y terminan haciendo altamente conflictivo e inestable el marco político y social dentro del cual esa estrategia va a tener que aplicarse. Sin un mejor funcionamiento del sistema social y político en su conjunto, Chile puede continuar en un ciclo de magro crecimiento económico, disgregación social y polarización política.

Los principales obstáculos —verdaderos nudos gordianos que hay que desatar— son a nuestro juicio los siguientes: el problema de la violencia y la consecuente necesidad de una definición democrática de los principales actores políticos, la brecha existente entre civiles y militares y la urgencia de reducirla, la definición del problema sindical y la aceptación del rol de los empresarios, la resolución del conflicto agrícola, el imperativo de la descentralización, y la necesidad de una definición frente al problema de la marginalidad social. Cada uno de estos temas es abordado en un capítulo de los que conforman esta segunda parte. Todos se redondean después en un capítulo final: un país posible.

5

LA DEFINICION DEMOCRATICA, LA VIOLENCIA Y EL PROBLEMA DE LOS PARTIDOS ANTISISTEMA

PARA lograr un reencuentro nacional que signifique conquistar la paz en el país hay que romper un primer nudo gordiano: el intento de imponernos la guerra como norma de convivencia; la definición del problema del país como el de un enfrentamiento a muerte entre las Fuerzas Armadas y su “enemigo interno”, los cuerpos militarizados de la izquierda leninista; o entre comunistas y anticomunistas, o entre “las fuerzas reaccionarias” y “las fuerzas progresistas”.

Cualquiera de esas definiciones acepta una división maniquea

del mundo entre buenos y malos, santos y pecadores, fascistas y “combatientes del pueblo”, defensores de la patria y “humanoides” terroristas, para usar la expresión poco feliz de un miembro de la Junta de Gobierno en Chile, a fines de 1986. Cuando el mundo se divide así, se suprime todo espacio para ejercer la política —el arte de negociar, de buscar persistentemente acuerdos que reflejen la voluntad mayoritaria de la población— por vías pacíficas.

El enfrentamiento como estrategia conduce a la violencia como táctica. La escalada de la violencia —desde las formas menores de la represión policial en los disturbios callejeros, hasta los encuentros armados y los atentados terroristas— se da inevitablemente cuando el interés de aquellos, situados en ambos extremos del espectro político, coincide en las ventajas recíprocas de definir el conflicto en términos de una guerra. La guerra se resuelve aniquilando al enemigo. Es “aquel acto de fuerza, de fuerza física, destinado a imponer nuestra voluntad al adversario”.

La guerra y la violencia en la vida política de un país reflejan siempre un intento insensato, por parte de algún sector de la población, de imponer por la fuerza “su” proyecto de país al resto de la sociedad. El reencuentro de Chile como nación comienza, entonces, por un acto racional colectivo que consiste en renunciar precisamente a eso: a imponer el propio proyecto al resto de la sociedad. Consiste en aceptar que la finalidad última de quienes comparten un determinado territorio debería ser la de construir *un país* entre todos. Ese país debería ser el reflejo, imperfecto pero perfectible, de la imagen de la sociedad que la inmensa mayoría de la población considera deseable.

Debido a que en toda sociedad se dan distintos intereses y visiones acerca del futuro, el país que se construye tendría que ser siempre una obra inacabada, pluralista en su origen; donde se constituyen mayorías y minorías que, alternándose en el poder, procuran poner su propio sello y hacer su contribución original al proyecto común, que es el país que se comparte y que se construye colectivamente.

No existe mejor método para construir un país que un sistema político abierto, pluralista y democrático. Sólo bajo ese esquema es posible que la sociedad se exprese con plena libertad, con garantía explícita de los derechos básicos de cada uno; y que los diversos sectores puedan disputarse —en un marco de pleno respeto recíproco y a través de elecciones libres y competitivas— el derecho a poner en aplicación, desde el Estado, las políticas públicas que correspondan a la propia visión de lo que es bueno para la sociedad en que se vive.

La aceptación permanente de estas reglas del juego es una condición *sine qua non* para la estabilidad democrática y, consecuentemente, para la convivencia en paz de una comunidad nacional.

La existencia de distintos proyectos es legítima, como lo es también el hecho de que compitan entre sí hasta alcanzar el apoyo mayoritario del electorado. Pero esos proyectos alternativos deberían inscribirse dentro del marco de ciertas “normas de equidad” destinadas a tener vigencia en la sociedad cualquiera sea la combinación política que alcance el gobierno. Dado que se trata de un compromiso de carácter pluralista, el sentido último de las normas de equidad es el de garantizar un espacio para el desarrollo más pleno de las potencialidades de cada grupo diferenciado en la sociedad. Por ello, las normas de equidad incluyen el respeto a las minorías, la consagración de los derechos de los trabajadores, la obligación social colectiva para con los marginados y excluidos, las condiciones para el normal funcionamiento del sector privado, las normas de respeto a la propiedad y otras cuestiones de interés colectivo.

Cuando esas normas de equidad son aceptadas consensualmente por la población, y cuando ésta se ajusta a las reglas democráticas para dirimir sus conflictos políticos, se puede decir que un país ha asegurado la paz y la libertad y que está en condiciones de resolver sus principales problemas económicos y eliminar sus lacras sociales.

LAS FUERZAS POLITICAS ANTISISTEMA Y LA VIOLENCIA

El problema más difícil que puede plantearse a una democracia ocurre cuando corrientes políticas significativas escogen convertirse en fuerzas antisistema y procuran reemplazar precisamente al régimen democrático recurriendo a la violencia e incluso al poder militar.

Los regímenes autoritarios siempre dejan una herencia de grupos violentistas. Algunos de ellos son constituidos por ex militares de la línea dura y de los organismos de seguridad, que forman “comandos” vigilantes que toman represalias contra sectores de civiles a los que consideran amenazantes. Otros son grupos de ultraderecha que, amparados por el régimen autoritario, desarrollaron a su sombra una organización paramilitar que procuran mantener vigente y activa durante la democracia.

El desmantelamiento de estos grupos paramilitares constituye una ardua pero imprescindible tarea del régimen democrático porque es condición de su supervivencia y eventual consolidación.

Hay otro problema, sin embargo, que en cierto sentido es más difícil de resolver. Es el que plantea la existencia de partidos leninistas revolucionarios en el seno de las democracias. Las sociedades democráticas de Europa Occidental optaron —casi sin excepciones— por incorporar a estos partidos al libre juego democrático. Como contrapartida, estas fuerzas han aceptado las reglas de convivencia de la democracia y, por lo tanto, son susceptibles de ser sancionadas, penalizadas e incluso disueltas si incurren en acciones tendientes a destruir la democracia o que son consideradas —en la constitucionalidad aprobada por el pueblo— constitutivas de delito o crimen.

La estrategia de estos países frente a los partidos comunistas constituye un acto de confianza en la fortaleza del sistema democrático. Refleja también la acendrada convicción de que —usando palabras de un ex Presidente del gobierno español, Adolfo Suárez— los partidos comunistas europeos ofrecen una

mercadería muy poco atractiva en los escaparates de las ideas políticas de la Europa Occidental.

Sometidos a la libre competencia para conseguir la adhesión voluntaria del pueblo a sus ideas, estos partidos tienden a perder peso relativo o se ven obligados —como en los casos de Italia y España— a modificar su oferta política hasta hacerla casi indistinguible de las de los partidos socialistas que operan dentro del sistema y que se definen, por tanto, en favor de la democracia representativa.

EL CASO DEL PARTIDO COMUNISTA CHILENO

Las dictaduras personales prolongadas crean condiciones de creciente polarización política. Sus tesis de erradicación violenta del “cáncer marxista”, su constante despliegue estratégico frente a un “enemigo interno” de contornos difusos en torno al cual declaran una guerra sin fin, y su indisimulada tendencia a perpetuarse en el poder, constituyen factores que invitan a los partidos leninistas a exacerbar las contradicciones del sistema, confrontándolo militarmente en teatros de operación reducidos pero sistemáticos en el tiempo.

La violencia revolucionaria se justifica así en función de la obcecación de un régimen autoritario que presenta una total impermeabilidad al cambio o a la negociación. La tesis encuentra un cierto arraigo popular en la desesperación de las masas excluidas y perseguidas por el régimen, las que suelen percibir totalmente cerrados los caminos pacíficos hacia un cambio en el estado de cosas.

La militarización de la respuesta leninista al régimen autoritario es un elemento nuevo en la política chilena. Corresponde, en palabras del Secretario General del Partido Socialista, Ricardo Núñez, a “un tremendo error de diagnóstico del PC y a su voluntad declarada de dar paso en el corto plazo a un régimen político distinto a una democracia representativa”.

En efecto, para un partido leninista enfrentado a una dictadura extrema existe la enorme tentación de comenzar a pensar

políticamente en términos de una situación revolucionaria. El PC chileno, en el Informe al Pleno del Comité Central de marzo de 1985, afirma que en Chile “madura rápidamente un escenario de este tipo”. Eso es lo que justifica, a ojos del PC, “usar métodos que permiten el uso creciente de la violencia revolucionaria del pueblo”, buscando “generar un desarrollo del elemento militar”, impulsando “el crecimiento de las milicias rodriguistas” y dando “todo su apoyo y simpatía al Frente Patriótico Manuel Rodríguez”.

El primer objetivo de estas acciones sería derribar a la dictadura. Pero no es el único. Según el Informe al Pleno: “la primera y principal tarea es echar abajo la dictadura. Su derribo será un acontecimiento revolucionario que puede dar origen a un gobierno democrático avanzado, bajo el cual podemos caminar hacia el socialismo en un proceso ininterrumpido, sin muralla china entre revolución antifascista, democrática y antiimperialista, y revolución socialista. La experiencia de los países de América Latina, Cuba y Nicaragua demuestran que esto es posible, a pesar de las dificultades de orden interno e internacional”.

De allí se sigue que el objetivo del PC sería el de construir una democracia avanzada con miras al socialismo, al estilo de Cuba y Nicaragua. No como un proyecto de largo plazo, posterior a una etapa de democracia representativa —denominada por ellos “democracia burguesa”—, sino inmediatamente después del gobierno de Pinochet.

Para incrementar la probabilidad de ese desenlace es que se procura aumentar la capacidad militar del Partido. Como lo afirma el documento antes citado: “un terreno en el que hemos entrado a trabajar en serio en los últimos diez años es el militar y paramilitar. Como Partido, desde el Comité Central hacia abajo, el trabajo que se realiza en este campo es asunto de permanente preocupación y aprendizaje”.

En realidad, la estrategia del PC en Chile es más compleja que la sola militarización de su acción política. El Partido prepara un escenario de rebelión popular que se apoya, como lo ha destacado en un lúcido análisis Genaro Arriagada, en

tres formas de lucha: la del frente de masas —tipo de acción política que corresponde a la más pura tradición histórica del PC chileno—, la lucha militar a través del FMR, y la que combina ambas formas expresada en las “Milicias Rodriguistas”.

Como es bien sabido, las milicias forman parte integral del Partido. Ejecutan acciones paramilitares y constituyen el campo de reclutamiento de los “combatientes” del FMR. Este mantiene una cierta autonomía respecto del Partido, aunque, en palabras de Luis Guastavino, “el FMR es una cosa muy importante, donde tenemos militantes nuestros y donde tenemos una presencia y una participación y orientamos a nuestros camaradas con la línea política del Partido... Es un trabajo muy serio... y tiene todas las características propias de la profesionalidad militar, entre las cuales está el secreto militar”.

La combinación de las tres formas de lucha llevaría a una sublevación popular en los principales centros urbanos, incluyendo, según el Informe al Pleno, “parte de las Fuerzas Armadas que se levantan contra la dictadura”. El proceso culmina en “el ocupamiento por las masas de los principales centros políticos del país”. La descripción detallada de la sublevación, incluida en el documento mencionado y que aquí omitimos por razones de espacio, recuerda escenas del asalto del Palacio de Invierno en la revolución soviética.

Esta es la postura oficial del PC chileno, catorce años después de iniciado el régimen de Pinochet, y mientras la oposición democrática al gobierno militar procura una salida pacífica y negociada con las FF.AA. con el objeto a instaurar en Chile una democracia representativa, pluralista, con plena garantía de libertades y derechos. Ambos proyectos, el de esta oposición y el del PC, no parecen compatibles. Ello convierte en mera retórica los persistentes llamados del PC a la “unidad”.

¿Están estas tendencias militaristas ya plenamente decantadas? En lo que respecta al PC, el mismo Secretario General, Luis Corvalán, parece dejar una rendija abierta al reconocer que de lo que se trata en el campo de la oposición es de una lucha por la hegemonía entre dos proyectos: el “democrá-

tico-burgués” de la Alianza Democrática, al que le atribuye un marcado sesgo conservador; y el de la “democracia avanzada con miras al socialismo”, en función del cual el PC diseñó su estrategia. La pregunta que surge es: si la disputa por la hegemonía la gana el proyecto “democrático-burgués” ¿estaría el PC dispuesto a cambiar su línea, volviendo a su opción histórica de aceptar la democracia burguesa y procurar mejorar su posición dentro de ella a través de la “lucha de masas”?

La pregunta no parece haberse planteado aún en el seno del PC. Por el momento, se procura ganar la lucha por la hegemonía mejorando la “correlación de fuerzas”, concepto que para los comunistas significa la acumulación de una fuerza popular y militar tal que la combinación de ambas sea capaz de imponer el proyecto comunista en la calle.

Desde la perspectiva de los conductores de ese Partido, la preeminencia de uno u otro proyecto no se decide por la regla de las mayorías en elecciones libres, sino por “la moral de combate, el nivel de organización, la capacidad de movilización, de homogeneidad del pensamiento y obviamente, de manera relevante, del componente militar” que el PC pueda acumular frente a las otras fuerzas de la oposición.

LAS FUERZAS ANTISISTEMA Y LA DEFINICION DEMOCRATICA

Con las mencionadas diferencias, tanto en los métodos de lucha como en el proyecto nacional que se postula para después de Pinochet, así como en los mecanismos para dirimir la hegemonía (elecciones libres versus “cambios en la correlación de fuerzas”), ¿cómo es posible construir en Chile un sistema político democrático, estable y sin exclusiones? Ese es el primer y gran nudo gordiano que se plantea a la política chilena después de Pinochet.

El problema no es fácil. Alude, en la situación del país, a una complejidad que no estaba presente con igual intensidad en ninguna de las transiciones recientes. En España, por ejem-

plo, ya en 1964 el PC había dejado de lado la tesis de la dictadura del proletariado y aceptaba incorporarse, con pleno respeto de las reglas, a la democracia que vendría después de Franco. En Brasil y Argentina el PC nunca tuvo ni remotamente la importancia que como fuerza política alcanzó en Chile.

Este factor, unido al hecho de la “personalización” del poder de Pinochet, que no desea abandonar el gobierno bajo ninguna circunstancia, es lo que probablemente refuerza la posición de los duros y los militaristas dentro del PC.

La percepción de “situación sin salida” se haría mucho más intensa y generalizada si Pinochet lograra —a través de artimañas, amenazas y fraude— aparecer como triunfante en un futuro plebiscito. Ello daría la señal, a muchos, de que el camino pacífico a la democracia se encuentra clausurado. Un fenómeno parecido fue el que decidió, en El Salvador, a toda una generación de universitarios, profesionales y comunidades cristianas de base, a irse a la guerrilla o a convertirse —desde sus puestos de trabajo— en cómplices y estructuras de apoyo del movimiento insurreccional. Igual percepción tuvieron las clases medias, los comerciantes, los profesionales, e incluso los sectores empresariales de Nicaragua durante los últimos años de Somoza.

De allí deriva la urgencia de definir las posiciones de unos y otros en el contexto de la política chilena. Porque, a la inversa de lo ocurrido en Centroamérica, en el país existe una voluntad latente enormemente mayoritaria —que comprueban todas las encuestas— que sustenta la idea de abrir un camino y apoyar los esfuerzos hacia una solución política democrática y moderada, sin violencias ni autoritarismos de ningún signo.

A este respecto es interesante destacar los resultados de una encuesta a pobladores, efectuadas por SUR Profesionales en el Área Metropolitana de Santiago. De una muestra representativa, se concluye que los pobladores están muy mayoritariamente por una salida democrática moderada. Un 38,7% apoyaría un gobierno de la DC sola, un 14,4% uno de la derecha sola y sólo un 5,9% un gobierno como el de la UP, porcentaje pare-

cido al apoyo que encontraría un nuevo gobierno militar (un 6,7%). Estos resultados confirman una tendencia observada anteriormente en encuestas efectuadas por FLACSO y CERC.

Tanto la evidencia empírica acerca del tipo de salida deseada por la inmensa mayoría del país, como las lecciones de los casos centroamericanos —particularmente el de Nicaragua—, hacen que toda una generación de demócratas chilenos no esté dispuesta a ceder a la tentación, fácil para algunos, de sumar fuerzas con los grupos militarizados de la izquierda a fin de derrotar a la dictadura. Si se cede la hegemonía de la transición a la izquierda leninista la democracia en Chile quedará sin conquistarse ni construirse. Por esa razón, la causa de la democracia requiere de definiciones claras en esta dramática coyuntura. Quienes tienen convicción democrática no deben ceder jamás ante el chantaje implícito en la militarización de la política que promueven algunos grupos de la izquierda: no se dialoga ni se negocia ninguna incorporación al régimen democrático bajo la amenaza de las armas.

La extrema izquierda tiene que recibir señales terminantes, en el sentido de que su persistencia en la línea militarista la lleva irremediablemente al aislamiento dentro del sistema político. De prolongarse esa situación bajo el régimen democrático, éste tendrá que enfrentar con firmeza, y con toda la autoridad que le dará el mandato popular, ese complicado desafío desestabilizador. Se hará sentir todo el peso de la ley, porque —después de catorce años de gobierno autoritario y de sus atropellos constantes a los seres humanos y sus derechos— no habrá legitimidad alguna para usar de la violencia y de las armas contra la inmensa mayoría que ha dado a ese gobierno democrático el mandato de pacificar el país, desarrollando un régimen abierto, pluralista y civilizado; y erradicando la violencia de la vida colectiva.

DILEMAS PARA EL PARTIDO COMUNISTA

El cambio de línea del Partido Comunista es una tarea que nadie sino los propios comunistas chilenos pueden realizar. La tradi-

ción histórica, antes del gobierno autoritario, define para este partido una trayectoria respetable en cuanto a ser un genuino representante de los intereses concretos de una parte significativa de la clase obrera.

Más allá de su retórica revolucionaria, el PC fue normalmente un partido dialogante, que aceptaba las reglas democráticas. Operó políticamente dentro del sistema. Llegó a participar, incluso, en gobiernos con la derecha. Durante el Frente Popular apoyó un compromiso con los empresarios —industriales y agricultores— con el objeto de impulsar la industrialización del país, bajo la conducción de la CORFO, aunque sin tocar la estructura agraria. Durante el gobierno de Jorge Alessandri negoció una paz social, de manera que sus dirigentes sindicales mantuvieron un permanente diálogo con ese gobernante de la derecha empresarial. ¿Por qué no retomar una trayectoria de práctica democrática? Es un dilema que se irá planteando cada vez con mayor fuerza al PC, a medida que se acerque el momento del cambio de régimen.

Otro factor que habrá que tomar en cuenta es que la URSS siempre influyó en la estrategia del PC en Chile. La aceptación del “internacionalismo proletario bajo la conducción de la URSS”, como un factor válido para la orientación de su acción local, ha sido un hecho incorporado a la práctica política del PC chileno por muchas décadas. Se sabe bien que la promoción del Frente Popular por parte del PC en Chile —como ocurrió también en Francia y en otros países— correspondió a una decisión estratégica de la URSS, en 1935, para detener el avance fascista en Europa. La consigna que emanó de Moscú fue la de constituir con presteza frentes populares antifascistas en aquellos países donde el PC tenía una influencia determinante. Chile era uno de esos países.

Ignorar este factor sería pecar de ingenuidad. No es una coincidencia que la casi totalidad de los viejos cuadros dirigentes del PC chileno vivan su exilio en Moscú. La influencia de la URSS está presente aquí como lo está la de Cuba, país donde se han entrenado cientos de “combatientes” comunistas chilenos. Esta dimensión —la influencia internacional en la

línea y conducta política del PC chileno— no debe menospreciarse en su ángulo negativo, por cuanto ella es indicativa del riesgo de internalizar en Chile el conflicto Este-Oeste, a través de la influencia soviética y cubana en este partido chileno.

Desde un ángulo más optimista, es claro que también queda abierta la posibilidad de que los eventuales cambios de línea respecto de Chile en esos países repercutan favorablemente en las decisiones de su congénere local. Estos cambios estarán influidos, a su vez, en Chile, por el curso de los acontecimientos; y en la URSS por consideraciones geopolíticas, en las cuales el conjunto de las democracias latinoamericanas podría tener una influencia no despreciable.

EL PC Y LA DEMOCRACIA

Pero aún es válida la pregunta: ¿cómo hacer política democrática en Chile en relación con el problema comunista? Porque es cierto que el PC, a pesar de todo, es un partido arraigado en el pueblo chileno. Su tradición obrera es muy auténtica, como lo es su presencia en los medios artísticos, culturales y en el mundo profesional. Los comunistas chilenos, como los de Francia, constituyen una subcultura nacional, una forma de vivir, un modo de relaciones sociales; son una parte del país, como lo son la subcultura laica o la subcultura militar. Son, por lo mismo, una realidad que no puede ser suprimida.

Por ello debe reiterarse: la única forma de abordar el problema desde la perspectiva democrática es la de persistir en marcar el desacuerdo frontal con la actual línea del PC. Señalar la ilegitimidad de la política militarizada, manifestar la voluntad de asegurar su plena incorporación al sistema político democrático, y dar garantías de que se respetarán los derechos ciudadanos de sus militantes, a cambio de su estricta adhesión a las obligaciones contraídas con el sistema democrático.

Para resolver estas diferencias y eliminar lo que amenaza con convertirse en un abismo entre los comunistas y el resto de los partidos políticos que están por la democracia, deberían

expresarse con claridad las condiciones que posibilitarían al PC romper con su aislamiento respecto del conjunto de los partidos democráticos. Desde luego el PC tendría que renunciar a la violencia y a la militarización de la política. Tendría que aceptar comprometerse con un futuro postdictadura verdaderamente democrático, donde las diferencias se diriman por la vía electoral, apelando a la voluntad real de las mayorías y no a la "mayoría activa" de la que suelen hablar los comunistas. Por su mayor capacidad de agitación e incluso militar, esa "mayoría activa" podría terminar imponiendo sobre el conjunto del país lo que no sería más que la voluntad de una "vanguardia iluminada".

La decisión de avanzar en esta dirección queda en manos del PC. Al país democrático no le cabe más que reiterar su objetivo de reencontrarse a través de un proyecto verdaderamente nacional, esto es, integrador de todos los sectores y corrientes existentes en la sociedad.

La persistencia en este objetivo no puede, sin embargo, confundirse con actitudes ambiguas hacia quienes no sean capaces de diáfana claridad en cuanto a su compromiso con la democracia y con la pacificación nacional.